

## **Desafíos para los gerentes sociales en espacios locales interculturales**

**Alejandra Faúndez Meléndez**

Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales  
FLACSO Sede Chile

### **1. Diversidad Cultural en la región**

Los pueblos latinoamericanos no pueden sino reconocer la diversidad cultural como parte de sus raíces históricas y sociales y de su realidad actual, tanto por la magnitud de sus poblaciones indígenas como por la relevancia del tema respecto de la equidad social y el respeto a los derechos humanos y la diversidad.

Los pueblos indígenas en el mundo son aproximadamente 300 millones de personas, repartidos en más de 70 países y hablantes de unas 4.000 lenguas. En América Latina, representan aproximadamente el 11% de la población total de la región (50 millones de personas) y en algunos países como Bolivia y Guatemala no son una minoría ya que representan más del 50% de su población total (PNUD, 2005).

En ciertos países de la Región los indígenas y grupos de ascendencia africana constituyen no sólo la mayoría sino además constituyen los grupos más pobres y excluidos de la sociedad. En el último informe de Desarrollo Humano del PNUD se señala por ejemplo, que más del 80% de la población afro-colombiana se encuentra en la actualidad en condiciones de pobreza y su ingreso per capita es aproximadamente un tercio del ingreso per capita nacional. En Brasil, Perú, Bolivia y Guatemala, los grupos afro-descendientes e indígenas son la mayoría de la población y el 60% de los pobres (PNUD, 2005).

Por otra parte, algunos estudios del Banco Interamericano de Desarrollo nos plantean que el fenómeno de la exclusión social afecta principalmente a los grupos indígenas, a los grupos de ascendencia africana, a las mujeres, a las personas con discapacidad y/o a las personas VIH positivas (BID, 2005).

En este contexto, nuestros países viven cotidianamente con el fenómeno de la diversidad, y la mayoría de las veces bajo los signos de la exclusión y la pobreza.

### **2. La compleja relación entre la diversidad étnica y lo público**

Desde épocas muy remotas que los Estados latinoamericanos se han relacionado con los pueblos originarios produciendo diversos resultados y respuestas. Múltiples han sido las formas de esa relación, que van desde la dominación y exclusión hasta el desarrollo de políticas específicas dirigidas a su población indígena o afro descendiente con base en el respeto y reconocimiento de la diversidad cultural y étnica.

Durante muchos años, la pobreza y la marginalidad social fueron consideradas como problemas meramente económicos. Sólo en las últimas décadas se ha dado mayor atención y análisis a una

compleja serie de prácticas sociales, culturales y económicas que resultan en exclusión social<sup>1</sup>. Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un nivel de vida mínimo que resultan de la iniquidad hacen que exista una alta correlación entre pobreza y exclusión social. Aunque no siempre son la mayoría de los pobres, los grupos tradicionalmente excluidos son los más pobres dentro de los pobres.

Estas tendencias señalan que la reducción de la pobreza será posible sólo si se enfrentan los complejos factores y determinantes de la exclusión social. Cada vez está más documentada la relación entre crecimiento económico, superación de la pobreza, y fortalecimiento (institucional, cultural y de capacidades) sociocultural como tres pilares que sostienen y hacen gobernables nuestras sociedades modernas. Una buena relación entre estos pilares permite a las personas mejorar su calidad de vida y contribuir a la construcción de sociedades más desarrolladas, equitativas e inclusivas.

También están suficientemente documentados los beneficios de promover políticas de inclusión social. Un estudio contratado por el BID el 2001 estimó las ganancias en el Producto Interno Bruto (PIB) si se eliminaran las discriminaciones de indígenas y afrodescendientes en los mercados laborales. Los resultados fueron los siguientes: la economía de Bolivia podría crecer un 36,7%; la de Brasil, un 12,8%; la economía de Guatemala un 13,6%; y la de Perú, un 4,2%. Esto sin considerar que además hay otros beneficios como las mejoras en términos de cohesión social, integración comunitaria, desarrollo educativo, entre otras, que también resultan de una mayor inclusión (BID, 2005).

En esta perspectiva, muchos organismos multilaterales y organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, buscan avanzar con los países en sus procesos de desarrollo en la región, incluyendo nuevas dimensiones y bajo nuevos paradigmas.

Un ejemplo de lo anterior es la tendencia de los organismos internacionales a incorporar en el lenguaje, en sus metas de desarrollo o incluso al crear instituciones, unidades o departamentos vinculados al análisis y propuestas en torno a la inclusión social, tal es el caso de la Unión Europea, del Banco Interamericano de Desarrollo, la UNESCO, OPS, entre otras.

En estos últimos años, en el caso de Chile se han diseñado estrategias con resultados positivos en la reducción de la pobreza. Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN<sup>2</sup> -que aplica el Ministerio de Planificación MIDEPLAN-, en 1987 los pobres representaban un 45,1% de la población total, con un 17,4% de ellos en condición de indigencia. Esta situación varió a un 38,6% para el año 1990, un 32,6% en 1992, un 27,5% en 1994, un 23,2% en 1996, un 21,7% en 1998, un 20,6% en el 2000 y llegando a un 18,8% en el 2003.

En este mismo sentido, en el país, se han implementado políticas públicas capaces de disminuir algunos déficit heredados de tantos años de inequidades. Son evidentes los avances en materia de reducción de la indigencia y pobreza; en los niveles de cobertura educacional por sobre el 92%; en implementar una reforma en salud que permite acceso garantizado a un conjunto de prestaciones recurrentes; en lograr

---

<sup>1</sup> Acceso limitado y sistemático a los beneficios del desarrollo a ciertas poblaciones con base en su raza, etnia, género y/o capacidades físicas.

<sup>2</sup> La encuesta CASEN tiene como propósito monitorear los cambios en la situación socioeconómica de la población y los resultados de la implementación de políticas sociales. Proporciona información acerca de las condiciones socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, sus carencias más importantes, la dimensión y características de la pobreza, así como la distribución del ingreso de los hogares. Se ha aplicado desde el año 1985 con una periodicidad de dos años, excepto la del año 89, que debió realizarse en 1990; y la del 2002 que se realizó el 2003. Las encuestas realizadas hasta la fecha, corresponden a los años 1985, 1987, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000 y 2003.

llevar adelante la reforma procesal penal que garantiza un acceso más expedito a la justicia. Del mismo modo, el país ha mantenido una política fiscal responsable que, mediante el principio de superávit estructural, ha permitido ahorrar cuando se tiene y garantizar el gasto social en periodos de mayor dificultad. También se ha logrado abrir nuestras fronteras al mundo, para mejorar el acceso a los mercados y a los intercambios culturales (Olavaria, 2005).

Un reciente estudio de Olavarría (2005) para Chile y en comparación con 4 países de América Latina, muestran el enorme impacto de la implementación de políticas sociales para que tales desarrollos fueran posibles. El paradigma emergente de la implementación de políticas sociales se caracteriza por la pluralidad de sectores (estatal, ONGs, etc.), la toma de decisiones por proyectos, la co-financiación, la competencia para la asignación de recursos, su objetivo es la universalidad de la satisfacción, la prioridad la tienen los más excluidos y pobres, y este enfoque está centrado en los impactos y fines e incorpora la noción de capital social de las comunidades como un aporte al desarrollo (Franco. 1996). En todo esto el gerenciamiento de las políticas sociales en los espacios locales es un factor esencialmente crítico. Desde esta perspectiva el rol de los gerentes públicos es decisivo para que tales políticas sean eficaces, eficientes, sostenibles y equitativas.

Junto a lo anterior, es muy importante reconocer otras realidades que también están presentes en el país. Existen en la actualidad grandes brechas en el acceso a los recursos y grandes inequidades desde el punto de vista económico, social y cultural. Chile es uno de los países que lidera los rankings de inequidades socioeconómicas, junto a México y Brasil, lo que es un problema significativo si consideramos que América Latina es la región más desigual del planeta. Esta situación de inequidad se expresa con mucha claridad respecto de la población indígena que continúan siendo los pobres entre los pobres.

Con respecto de algunas situaciones específicas de inequidad respecto de la población indígena en Chile, es importante reconocer que sólo en los últimos años se han implementado políticas sostenidas y transparentes<sup>3</sup>. En este período se han logrado implementar líneas de acción que abordan la temática cultural, de desarrollo de grupos culturalmente diversos y, generar paralelamente una sostenida estrategia de reparación y recuperación de tierras que ancestralmente pertenecían a las comunidades indígenas. En ese contexto surgió la Política del Nuevo Trato como una respuesta formal y proyectada de lo realizado hasta la fecha, pero también se entiende como un imperativo para construir una nueva relación entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad en la perspectiva del fortalecimiento de un actor tradicionalmente excluido. Incluso conceptualmente, en el mundo indígena, el cruce de los ejes de carencia, vulnerabilidad y capacidad de gestión con los campos temáticos convencionales: tierras, territorios y recursos naturales; nutrición, salud y saneamiento; economía; vivienda y bienes de consumo; educación; identidad y cultura; e autonomía, acceso a la justicia y participación política, ofrece una visión más comprehensiva del bienestar o de la pobreza (Renshaw y Wray. 2004).

En este contexto, dos temas de máxima relevancia respecto de lo planteado son: la necesidad de generar capacidades de la población para acceder y tomar todas las oportunidades que el crecimiento genera y superar su situación de pobreza; el otro tema igual de relevante es la necesidad de profundizar los procesos de modernización de la gestión de las políticas sociales fortaleciendo a todos los actores del desarrollo, entre ellos a los grupos que han sido sistemáticamente excluidos de la toma de decisiones y que en los últimos años han estado abriéndose oportunidades en el mundo público como autoridades públicas

---

<sup>3</sup> La Política de Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas se firmó en abril del año 2004 por el Gobierno de Ricardo Lagos.

elegidas en los niveles locales del Gobierno<sup>4</sup>, esto también permite a las comunidades desarrollar procesos de mayor autonomía y empoderamiento para hacer el desarrollo sostenible en el tiempo.

### 3. Gerentes públicos modernos en un mundo diverso

Con todo, estamos frente a nuevos y complejos desafíos. Recién en las últimas décadas se ha planteado con fuerza la consideración de la identidad y la equidad social para los grupos étnicos en el marco de la democratización de nuestras sociedades y la promoción del Desarrollo con Identidad. Esto ha obligado a los gobiernos a considerar –en mayor o menor medida- tanto los marcos institucionales de los pueblos indígenas, como sus concepciones de desarrollo, su capital social, sus tecnologías y prácticas culturales.

En esta relación recíproca todos aprendemos. La generación de nuevos puentes culturales pone en entre dicho muchas de las formas que tenemos de hacer las cosas en el mundo de lo público los no indígenas, pero también muchas de las maneras de gestionar que tradicionalmente han ocupado ellos mismos. En esta relación, todos tenemos algo que aprender, nuestras sociedades se vuelven cada vez más dinámicas y la relación entre ambos mundos parece inevitable. Por ello, los temas de fondo son ¿de qué manera en mundo público puede ser más sensible, respetuoso y pertinente frente a la diversidad?, y también ¿de qué manera los grupos étnicos y los pueblos indígenas se incluyen e involucran en los procesos de formación y gestión de políticas públicas que los atañen directamente? Resolviendo esta ecuación lo más armoniosamente avanzaremos hacia sociedades más interculturales e inclusivas.

Muchos de los elementos constitutivos de la llamada Reforma Gerencial, nos refieren a la profesionalización de la alta burocracia pública, al establecimiento de nuevos mecanismos más flexibles de gestión, a la orientación por resultados, a la incorporación creciente del control de gestión, a la desconcentración organizacional y de la ejecución de programas, al mejoramiento de la rendición de cuentas y a la focalización en el interés de los ciudadanos, y desde esta perspectiva de ciudadanos, los indígenas adquieren notoriedad y presencia. Muchos de estos elementos han impactado profundamente a nuestros sistemas gerenciales, en todos sus niveles, sin embargo, es cada vez más evidente el *trade off* que existe entre la estandarización creciente de los mecanismos modernizadores y la diversidad –también creciente- de respuestas públicas posibles frente a problemas complejos de poblaciones muy heterogéneas.

En esta línea se ha estado avanzando y se han realizado esfuerzos en la región por diseñar e implementar innovaciones en la acción pública desde la dimensión sociocultural, ya sea políticas específicas, como también a través de nuevos programas sociales, o incluso un conjunto innumerable de mecanismos, procedimientos y metodologías innovadoras tanto en experiencias antiguas y conocidas, como en otras recientemente implementadas. Se intenta “recuperar las realidades” como plantea Kliksberg (2004) para incorporar mayor pertinencia cultural a la acción pública, entendiendo la pertinencia como los contenidos teóricos y/o metodológicos y las prácticas concretas de intervención en comunidades o pueblos diferenciados étnicamente, que contribuyen al rescate, a la promoción y/o desarrollo de sus culturas, su identidad y su patrimonio.

---

<sup>4</sup> En las últimas elecciones municipales -en comunas con alta concentración de población indígena- fueron electos Alcaldes y Alcaldesas miembros de los pueblos originarios, destacando Tirúa, Alto Bío Bío, Colchane, San Pedro de Atacama, Isla de Pascua, Lumaco y Chol Chol. Estos nuevos dirigentes han levantado al demanda de apoyo técnico para la realización de su gestión dado que los espacios públicos no eran un espacio donde ellos se desenvolvían anteriormente, lo que los deja en una situación de desventaja respecto de sus posibilidades de gerenciamiento y efectividad de sus políticas y programas municipales.

Hace sólo un año el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo dedicó un especial esfuerzo en atender la temática de la diversidad en el medio de un creciente nivel de conflictos étnicos y raciales en el mundo. Según los análisis de la institución, es cada vez menos posible vivir en sociedades homogéneas desde el punto de vista cultural, religioso o étnico, y eso trae consigo una serie de desafíos para las políticas públicas pero también para sus gerentes.

En este contexto, se ha realizado un buen número de iniciativas destinadas a generar oportunidades de inclusión social o cultural cuyo seño y paradigma ha sido –también en muchos casos- el de la cultura dominante, pero junto a esto se ha ido abriendo un campo de acción que recupera la idea base de la interculturalidad cuyo énfasis está en el conocimiento, promoción, respeto y desarrollo bajo los paradigmas de cada cual.

Este enfoque supera la lógica de la tolerancia, ya que implica desarrollar activamente la posibilidad de comprender bajo perspectivas culturales diferentes, y sino comprender, al menos empatizar con las perspectivas del otro culturalmente diverso bajo un enfoque de derechos humanos. Por otra parte, en los últimos años han entrado al debate nuevos paradigmas para entender y actuar con el mundo indígena desde el mundo público. Cada vez son más conocidos los enfoques de capital social y cultural como nuevas maneras de enfrentar el tema del desarrollo lo que permite contar con nuevos enfoques y respuestas públicas considerando las particularidades locales y específicas como un potencial del desarrollo. Esto nos sitúa frente al desafío de reconocimiento de la diversidad como un valor y un aporte al desarrollo y no como un escenario a ser intervenido para lograr mayor estandarización y homogeneidad.

El espacio local, en este nuevo contexto, constituye un espacio privilegiado para la interacción. Es allí donde se encuentran las comunidades, los grupos y las personas concretas. La focalización territorial, facilita la coordinación multisectorial e incrementa la probabilidad de llegar a los sectores excluidos con la provisión universal de servicios, recogiendo eficazmente las necesidades de los territorios y abriendo paso a la generación de iniciativas más incluyentes y cercanas a las personas de la comunidad.

En varios países de la región han sido en primer lugar los municipios quienes han abierto las puertas a las dinámicas y demandas de los pueblos indígenas, y luego los niveles regionales y centrales ha hecho lo suyo. Sin embargo, el potencial que tiene lo local no ha sido del todo aprovechado para generar los espacios de intercambio intercultural necesarios en el mundo de hoy.

#### **4. Algunas pistas para los gerentes públicos sobre la interculturalidad**

##### **4.1. El poder de la información**

En nuestras sociedades modernas, tanto la producción y el uso óptimo de la información es cada vez más una preocupación compartida en los diferentes enfoques de política social. También es importante reconocer que en este plano se ha avanzado muchísimo con respecto a algunas décadas atrás. Hoy en día estamos en presencia de un consenso bastante generalizado respecto de la urgencia e importancia de invertir en estrategias, sistemas y metodologías que provean información adecuada.

La información es un recurso poderoso para mejorar la efectividad, la eficiencia y la eficacia de las políticas y programas sociales. Estamos ciertos de que si los gerentes sociales manejaran información sistemática y de calidad a bajo costo –o al menos a un costo razonable- esto contribuiría a diseñar y/o implementar políticas y programas sociales más pertinentes.

La información no sólo nos provee de un mejor conocimiento de la realidad que permite identificar de una manera más empírica los problemas que debemos atender, sino también permite tener acercamientos más adecuados respecto de objetivos y estrategias políticas y operativas. Al mismo tiempo, la información genera mayores posibilidades de diálogo intercultural en la medida que esta es transferida a grupos o actores sociales afectados de manera transparente y oportuna. Podría avanzarse más incluso si diseñamos sistemas de información capaces de considerar las dimensiones socioculturales en todo el proceso de producción de la misma.

Por todo esto, pese a que existe consenso respecto de la necesidad de sistemas y metodologías adecuadas de diagnóstico, de seguimiento y de evaluación considerando las dimensiones socioculturales de nuestros pueblos, la mayoría de nuestros sistemas son todavía precarios a la hora de desagregar datos y producir información para la toma de decisiones. El procesamiento de información estadística regular por ejemplo, implica contar con una batería mínima de criterios, definiciones operacionales, capacitación de personal encargado, etc. Para establecer algunos parámetros que contribuyan a la visibilización de nuestras realidades pero al mismo tiempo la comparación entre grupos o poblaciones. Esto en sí mismo, es un desafío de envergadura.

En este sentido, la necesidad de tener instancias e instrumentos que focalicen acciones en procesar estadísticas con consideraciones étnicas es un esfuerzo reciente en la región. Algunos institutos estadísticos han hecho lo suyo en los CENSOS. Sin embargo, el procesamiento de información en base a datos cuantitativos sobre la realidad indígena en nuestros países es insuficiente para las necesidades de planificación, toma de decisiones y evaluación de las políticas públicas indígenas. No obstante, en el espacio local se abre toda una gama de posibilidades a través de los sistemas de registros administrativos locales de las instituciones públicas.

#### **4.2. Los espacios de diálogo intercultural**

Demasiadas veces, en la región nos hemos topado con el argumento “se requieren soluciones técnicas...y la presencia de actores específicos sólo retrasa o incluso entorpece la acción pública”. Esta mirada viene a reflejar el sesgo e interpretación simplista de la resistencia a la participación social en la definición de estrategias y el diseño de políticas y programas. Este tipo de enfoque esconde muchas veces un problema de poder.

Se requiere por tanto, nuevos gerentes sociales, capaces de aventurarse en torno a nuevos enfoques de las políticas sociales, que apunten a “(...) construir una nueva cultura social e institucional que se exprese en prácticas sociales ajustadas a los aspectos normativos de los derechos humanos y en quehaceres institucionales distintos, que redefinan los contenidos, la organización y la implementación de los programas y proyectos sociales y contribuyan a garantizar el acceso universal a los bienes y servicios que aseguran una vida digna” (Guendel. 2001).

La generación de espacios de diálogo desde un enfoque de derechos de la política social abre posibilidades o sólo de mayor pertinencia y adecuación de las políticas sino también de empoderamiento de los grupos socialmente excluidos o desfavorecidos.

Esto requiere de intervenciones e innovaciones en el campo de la planificación –desde una perspectiva más operativa-, en el diseño de instrumentos de planificación “dirigidos a propiciar el desarrollo de capacidades humanas y del empoderamiento social, tanto en los campos de la asistencia inmediata como de la prevención de la exclusión social” (Guendel. 2001). Sin embargo, no se restringe a ella en el marco de una manera más global de comprender la política social desde una perspectiva más inclusiva.

### 4.3. La superación del enfoque de “los vulnerables”

Existe una opinión muy divulgada según la cual los indígenas son un grupo “vulnerable” y que se debe abordar la política pública y los programas con esa visión de “carenciados”. Bajo esta visión, la mayoría de los programas parten de la necesidad de “resolver” los problemas o carencias que los indígenas tienen siendo una noción asistencialista y paternalista de la política pública más clásica.

Pareciera que la sola declaración de Programas “para indígenas” genera una suerte de sobreentendidos respecto de la población objetivo diluyendo todo un universo de diferencias entre grupos étnicos que genera tensión entre ellos y falta de pertinencia en los casos más extremos de homologación. En un programa de esta naturaleza parece necesario considerar una serie de características (tiempos, geografías, prácticas, concepciones, ritmos culturales) diferentes según cada grupo étnico, teniendo en cuenta permanentemente la triada que hace a la condición étnica: lengua, territorio y marco institucional indígena para el diseño de instrumentos de distinto tipo.

En definitiva considerar a los indígenas como un grupo socialmente homogéneo puede conducir a un tremendo fracaso de las políticas sociales, y del mismo modo considerarlos “vulnerables”, puede cerrarnos a la posibilidad de contar con el enorme potencial y riqueza patrimonial de los indígenas, y por lo tanto, de una pérdida de oportunidades de desarrollo y sostenibilidad de nuestras sociedades.

Desde esta perspectiva, es muy relevante realizar esfuerzos por visibilizar las contribuciones específicas de los pueblos indígenas al desarrollo de la humanidad y el enorme valor cultural de su existencia y promoción para la sociedad no indígena.

### Bibliografía

Aguilar Villanueva, Luis F. (2003) Estudio introductorio de la Cuarta Antología. En: *La implementación de las políticas. Colección Antología de Políticas Públicas*. México. Grupo Editorial Miguel Angel Porrua.

Barzelay, Michael (2003) *Preparing for the future. Strategic Planning in the U.S. Air Force*. Brookings Institution. Washington D.C., USA.

Faúndez, Alejandra. 2004. Pertinencia cultural en programas públicos intersectoriales. El caso del Programa Orígenes de Chile. Estudio de caso. Instituto Interamericano de Desarrollo, INDES del Banco Interamericano de Desarrollo. Mimeo.

Franco, Rolando. 1996. “Los paradigmas de la política social en América Latina”, en *Revista de la CEPAL*, Número 58, Santiago de Chile.

Guendel, Ludwing. 2001. *Políticas públicas y derechos humanos, Observatorio Ciudadano*. UNICEF.

Kingdon, John. (1995) *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. Second Edition. New York, USA. Longman.

Kliskberg, Bernardo (2004) *Más ética, más desarrollo*. Segunda Edición. Buenos Aires, Argentina. Temas Grupo Editorial SRL.

Moore, Mark H. (1998) *Gestión Estratégica y Creación de Valor en el Sector Público*. Buenos Aires, Argentina. Editorial Paidós.

Olavarría, Mauricio. 2005. *Pobreza, Crecimiento Económico y Políticas Sociales*. Santiago de Chile. Editorial Universitaria.

O’Toole, Laurence Jr. (1989) Recomendaciones prácticas para la implementación de las políticas que involucran a múltiples actores: una evaluación del campo. En: *La implementación de las políticas*.

Aguilar Villanueva, L. (2003). Colección Antología de Políticas Públicas. Cuarta Antología. México. Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa.

Pressman, Jeffrey y Wildavsky, Aaron. (1973). *Implementación. Cómo grandes expectativas concebidas en Washington se frustran en Oakland*. México. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y administración pública, A.C. y Fondo de la Cultura Económica.

Renshaw, John y Wray, Natalia. 2004. Indicadores de pobreza indígena. Borrador preliminar. BID. Mimeo.

### **Reseña Biográfica**

Alejandra Faúndez Meléndez. Chilena. Magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y Trabajadora Social del IPS. Sus áreas de especialización son el diseño, implementación y evaluación de políticas sociales con enfoque participativo y de género.

Ha sido docente de las cátedras: Género y Políticas Públicas, Gerencia Social, y Metodologías de Desarrollo Comunitario en Universidades chilenas y extranjeras. Es docente visitante del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL) y del Programa de Educación para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de México. En su experiencia como investigadora ha realizado numerosos estudios en FLACSO Sede Chile, fue Coordinadora General del Proyecto Management of Social Transformation (MOST) de UNESCO en 4 países de América Latina y consultora de organismos nacionales e internacionales como el Fondo de Población de Naciones Unidas (FNUAP), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) contando con variadas publicaciones en las áreas de su especialidad. Actualmente es docente-investigadora del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas de FLACSO Sede Chile.